



España, un país hipotecado

Spain, an indebted country

■ María Vega*

Resumen: El crédito fácil para invertir en *ladrillo* permitió a España vivir un milagro económico artificial hasta 2007 con la complicidad de una Administración que hacía caja en cada transacción inmobiliaria. La crisis puso fin a ese sueño. Sin financiación, familias y empresas se han visto obligadas a embarcarse en un proceso de reducción de deuda sin precedentes. Pero el sector público no ha seguido su ejemplo y ha confiado el futuro del país a una deuda que ronda el 100% del PIB.

Palabras clave: Crisis financiera española. Deuda pública. Deuda privada.

Abstract: Easy credit for investing in real estate allowed Spain to live in an artificial economic miracle until 2007, with the complicity of an Administration that filled the state coffers in every sale of property. The crisis ended that dream. Without funding, families and businesses have been forced to embark on a process of unprecedented debt reduction. But the public sector did not follow this trend and has entrusted the future of the country to a debt of around 100% of GDP.

Key words: Spanish Financial crisis. Public debt. Private debt.

■ En 2007, España se creía una potencia económica. Aspirante a formar parte del selecto club del G8, este país era admirado en todo el planeta por su fuerte crecimiento económico, el aumento de la riqueza de sus ciudadanos, la capacidad de sus grandes empresas de expandirse por todos los rincones del planeta y la buena salud de sus finanzas públicas. Mientras EEUU hacía temblar al mundo financiero por el estallido de la crisis de las hipotecas *subprime*, en España, el entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, se permitió cerrar el ejercicio con el mayor superávit de la historia. Aquel año, el Estado ingresó 23.368 millones de euros más de lo que necesitaba para cubrir sus gastos, es decir, logró un excedente equivalente al 2,23% del PIB. La partida de la deuda también estaba controlada. El sector público español debía a los mercados internacionales algo menos de 383.800 millones de euros. Si hubiera querido devolver todo de golpe, podría haberlo hecho con el PIB de tres comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía y Canarias.

* La autora es periodista y editorialista especializada en temas económicos.

Ocho años después, esa deuda se ha disparado hasta superar el billón de euros. Esto significa que si España quisiera hoy hacer frente de una vez a sus pagos pendientes tendría que hipotecar la riqueza de todas sus comunidades autónomas. En este tiempo, la deuda pública se ha disparado hasta el 97,79% del PIB nacional (véase tabla 1). Si todo va bien —cosa que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya ha puesto en duda—, el Estado español cerrará este ejercicio con un déficit del 4,2%. Esto significa que le faltarán para

cuadrar sus cuentas públicas algo más de 42.000 millones de euros.

En 2015, España vuelve a ser admirada por su evolución económica, pero con recelos. En Europa se aplauden las cifras macroeconómicas de un país que en 2012 tuvo que pedir un rescate financiero y, tres años después, va a ser el que más crecerá de la Eurozona por detrás de Letonia. Esa es una cara de la moneda. La cruz es que sus ciudadanos se sienten más pobres que hace un lustro, la sociedad española es más desigual y las empresas aún se están

recuperando del *shock* vivido en estos últimos años. Algunas de las grandes multinacionales que comenzaron la década colonizando otros mercados han tenido que tomar decisiones drásticas, como la de reducir su tamaño para recortar deuda. La pequeña empresa que ha sobrevivido al fin de la barra libre del crédito se ha visto obligada a explorar nuevas vías de financiación alternativas a la banca.

¿Cómo se truncó el sueño? Lo cierto es que el siglo XXI no pudo comenzar mejor para la economía española. El abandono de la peseta para competir en el mundo con una moneda europea, junto con el dinero fácil procedente de un modelo económico basado en el *ladri- llo*, permitieron a la economía española vivir un idilio entre los años 2000 y 2007.

Gracias al imponente crecimiento económico, que llegó a ser del 4% en 2006, la Bolsa española se erigió como uno de los destinos más atractivos para el capital extranjero. El clímax de aquella euforia se alcanzó el 8 de

Tabla 1. Evolución de la deuda pública española

	Millones de euros	% sobre el PIB español	Deuda pública <i>per cápita</i> (€)
2000	374.557	58%	9.242
2001	378.883	54,20%	9.301
2002	384.145	51,30%	9.279
2003	382.775	47,60%	9.064
2004	389.888	45,30%	9.105
2005	393.479	42,30%	9.015
2006	392.168	38,90%	8.839
2007	383.798	35,50%	8.482
2008	439.771	39,40%	9.564
2009	568.700	52,70%	12.264
2010	649.259	60,10%	13.952
2011	743.531	69,20%	15.919
2012	890.978	84,40%	19.042
2013	966.170	92,10%	20.739
2014	1.033.857	97,70%	22.256
2015*	1.053.025	97,79%	22.663

Fuente: Banco de España y Datosmacro.com (*mayo 2015)

noviembre de 2007, cuando el Ibex 35 cerró en su máximo histórico, en 15.823,7 puntos, con una capitalización que valoraba sus empresas en más de 546.815 millones de euros.

Símbolo del progreso europeo, España se convirtió en el modelo de referencia para la docena de países que se incorporaron a la Unión Europea entre 2004 y 2007. El Este de Europa miraba a nuestro país para seguir sus pasos y sumarse al carro de la bonanza que aparentábamos vivir como miembros de la moneda única. Como casi todo en esta vida, la luz que proyectaba la economía española también arrojaba sombras. Con la llegada del euro, los españoles percibían que los precios iban al alza (con su entrada en circulación en 2002, la inflación aumentó una cuarta parte en menos de 12 meses hasta alcanzar el 4% en diciembre). Pero el aumento del poder adquisitivo permitió creer a la sociedad española que más pronto que tarde contaría con el nivel de vida de su compañero de divisa, Alemania. Entre 2000 y 2007 la riqueza *per cápita* aumentó en España más de un 45%, hasta 23.893 euros por habitante, una cuantía muy lejana a la de los germanos (30.600 euros), pero superior a la de otros países de nuestro entorno, como Italia (21.800), y próxima a la siempre admirada Francia (24.400 euros).

El bienestar económico animó a la Administración Pública a abordar grandes proyectos. Un icono de esa euforia fue el *Plan de Infraestructuras* que se lanzó en 2005 con la promesa de que el 90% de los españoles tendría una parada de AVE a menos de 50 kilómetros de su casa. Y, ante tanto progreso, los españoles —que siempre han sido amantes de la inversión inmobiliaria— se animaron a participar en el festín con la compra de viviendas, una inversión que aparentaba ser la más segura y rentable de todas las posibles.

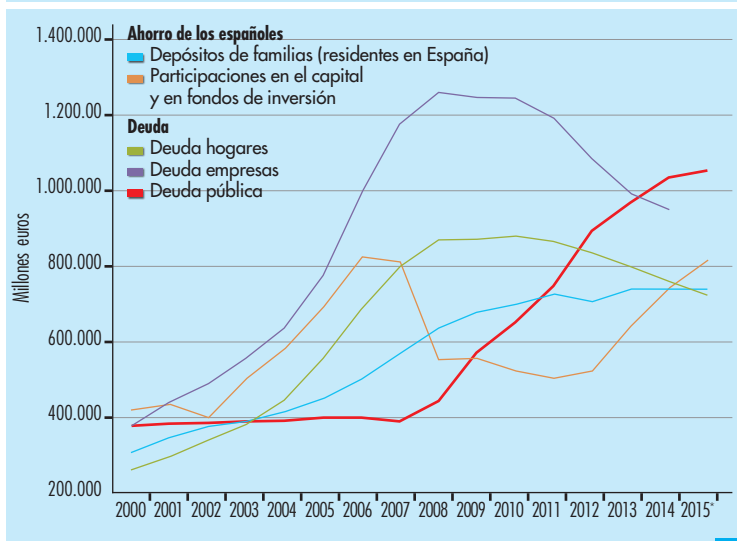
Ese avance de la riqueza no hubiera sido posible de no haber sido por el crédito fácil

que la banca concedió en aquellos años con el visto bueno del Banco de España. Entre 2000 y 2007, el crédito hipotecario creció un 275%, hasta 593.655 millones de euros, según los datos de la citada institución financiera. El espejismo de la riqueza también hizo que los españoles solicitaran de préstamos para adquirir otros bienes, como coches. En ese periodo, el crédito al consumo se disparó hasta los 97.141 millones de euros, cifra que más que multiplicaba por dos la del inicio de la década.

Las empresas tampoco quisieron perderse la fiesta y se endeudaron para aprovechar el tirón económico y expandir su negocio primero por España y después por el resto del mundo. Una estrategia que sólo puede entenderse hoy si se recuerda que en aquellos años el endeudamiento estaba bien valorado por los analistas. Las grandes multinacionales del país, como Telefónica, Repsol YPF o Iberdrola, y los dos grandes bancos, Santander y BBVA, aprovecharon el crédito fácil y la pujanza de la Bolsa para financiar su expansión internacional e implantar su marca en Europa, Latinoamérica y en menor medida, Asia. Y lo hicieron elogiadas por los mercados y sus expertos financieros.

El resultado final de este empacho fue que la deuda privada (familias más empresas) en España llegó a representar en 2007 el 212% del PIB, según datos de Afi (Analistas Financieros Internacionales). Una riqueza nacional que pendía, por un lado, de un consumo a golpe de tarjeta de crédito y, por otro, de un modelo basado en el sector inmobiliario y el turismo. En esta delicada situación se toparon las familias y empresas españolas con la crisis financiera que en el verano de aquel año estalló en EEUU y fue agravándose poco a poco hasta septiembre de 2008, cuando quebró el coloso de la banca Lehman Brothers y se llevó por delante al sector financiero de todo el planeta.

Tabla 2. Visión de conjunto de la evolución entre 2000 y 2015* de la deuda (familiar, empresarial y pública) y de los ahorros de los españoles (millones de euros)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España y Datosmacro.com (*2ºT de 2015)

1. El monstruo de la deuda pública acorrala al sector privado

Sin embargo, como comentábamos antes, el sector público sí tenía por aquellas fechas sus cuentas controladas. El superávit del Estado y una deuda que representaba 35,5 puntos del PIB —según datos del Banco de España— parecían manejables para un país con empresas potentes y que, al menos en apariencia, estaba respaldado por el Banco Central Europeo (BCE).

Cuando la caída de Lehman hundió los mercados financieros, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se sintió cómodo para echar mano del modelo *keynesiano* y lanzar el polémico *Plan E*, al que luego siguió el *Plan de Economía Sostenible*. Pero esa estrategia de aumentar el gasto para impulsar el crecimiento demostró pronto estar envenenada.

Los fondos de aquellos planes acabaron sobre todo en manos de Ayuntamientos, lo que contribuyó a mantener la quimera de

que el sector público no iba a verse afectado por el estallido de una burbuja que llevaba años alimentando a la Administración española a base de tributos por las transacciones inmobiliarias o el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Además, el empleo que se creó con esos fondos públicos fue temporal y trató de mantener vivo, aunque con respiración asistida, a un sector económico, el del *ladrillo*, que ya no podía dar más de sí.

El resultado fue una inversión superior a los 30.000 millones de euros que se demostró incapaz de detener la recesión a la que estaba abocada la economía española. Podríamos decir que ese *derroche* marcó el inicio de un cambio de tendencia para las finanzas públicas que aún persiste ocho años después.

España comenzó a recurrir a la deuda para tratar de combatir una crisis financiera que su Gobierno, los organismos internacionales y el BCE minusvaloraron en un primer momento. El resultado fue que en 2010, cuando el epicentro del terremoto financiero se trasladó a Europa con el rescate a Grecia, la deuda pública ya casi se había multiplicado por dos y superaba el 60% del PIB. Y en 2012, cuando el *tsunami* de la crisis del euro se cebó con nuestro país, aquella se había disparado ya hasta el 84% del PIB. El superávit del Estado se había tornado en déficit hacía tiempo y España dependía más que nunca de los mercados financieros. Unos mercados que en el verano de ese año se cerraron a cal

El Museo Príncipe Felipe (derecha) y el Hemisférico (al fondo), ubicados en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, son un ejemplo de la cuestionable utilidad y sostenibilidad de este tipo de infraestructuras





y canto. Los inversores huían espantados de una nación sumida en una situación de destrucción de riqueza por la dura recesión y el fuerte aumento de desempleo. Tampoco ayudaba a retenerlos la aparente incapacidad de sus dirigentes —un Gobierno central, 17 autonómicos y más de 8.000 municipales— para cuadrar las cuentas públicas y controlar el déficit.

Sin embargo, el curso que había tomado para entonces el sector privado era muy diferente al de la Administración. Con el grifo de la banca cerrado por completo y ante la devaluación de su riqueza por la caída de los precios del sector inmobiliario y las acciones bursátiles, a las familias y empresas no les quedó otro remedio que apretarse el cinturón.

Ni siquiera en el segundo semestre de 2012 (cuando la prima de riesgo comenzó a relajarse tras las famosas palabras que pronunció el presidente del BCE, Mario Draghi, afirmando que haría todo lo necesario para preservar el euro), el sector privado pudo respirar con algo de financiación. El escaso capital que llegaba a España a través de los mercados siguió siendo absorbido prácticamente en su totalidad por el Estado.

Así llegó 2015, el último año en el que el Gobierno espera que la deuda pública siga aumentando. Según recordaba un reciente estudio elaborado por Afi para Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros), desde 2007 hasta la fecha la deuda pública se ha triplicado, mientras que el endeudamiento de empresas y hogares se ha reducido en 440.000 millones de euros (cifra que equivale al 40% del PIB).

Ese saneamiento ha sido más intenso en el sector empresarial, con una caída de la deuda de 320.000 millones de euros. Algo que se explica sobre todo por el hecho de que el crédito de las familias es en su mayoría hipotecario y, por lo tanto, tarda-

rá muchos más años en absorberse que el empresarial.

En cualquier caso, el dato agregado coloca a España como el país que más ha reducido su deuda privada en estos complicados años de crisis, según el citado estudio. La pena ha sido que ese esfuerzo de empresas y hogares ha quedado oculto ante el imparable aumento de la deuda pública que según los últimos datos supera el billón de euros y representa el 97,79% del PIB.

Además, España sigue teniendo el dudoso honor de ser el segundo país con más déficit de Europa pese a que entre 2011 y 2014 los ingresos de Estado aumentaron gracias a medidas, como la subida de impuestos, que han exigido también sacrificio al sector privado. A engordar ese déficit también ha contribuido el descalabro de las cuentas de la Seguridad Social. No sólo por el alto desempleo, sino también por el nuevo modelo de relaciones laborales que se ha impuesto en España por la crisis. Pese a que el Gobierno espera acabar esta legislatura con más afiliados que cuando llegó al poder en 2011, los ingresos de la Seguridad Social serán en diciembre inferiores a los de hace cuatro años debido a que la baja inflación y la devaluación salarial han reducido notablemente las bases reguladoras.

También el fondo de reserva de la Seguridad Social ha sido otro de los damnificados por los problemas del Ejecutivo para cuadrar sus cuentas. En los últimos seis años, los distintos gobiernos han tenido que recurrir a la llamada *hucha de las pensiones* repetidamente para hacer frente a gastos, como las pagas extra de los jubilados. Durante ese periodo, tan sólo en 2010, el fondo recibió una aportación por los excedentes presupuestarios de la Seguridad Social. Y la delicada situación de la Seguridad Social es, junto con la incapacidad de controlar el gasto de las comunidades autónomas, la principal amenaza para que España pueda

cumplir con el objetivo de déficit del 4,2% que comprometió con Bruselas para 2015.

Sin embargo, el déficit, que nos colocó en el ojo del huracán de la crisis en 2012, hace tiempo que dejó de obsesionar a los mercados financieros. Primero, porque tras un resbalón inicial, el Gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido mandar a los inversores el mensaje de que España es capaz de hacer sus deberes al haber logrado reducir el déficit desde el 9,2% del PIB en 2011 al 5,8% (no incluye el préstamo del rescate financiero) en 2014. Pero también gracias a que el viento de cola que sopla a favor de España desde el exterior nos va a permitir experimentar un crecimiento en 2015 superior al 3%, algo impensable hace apenas un año. Los estímulos del BCE (que suponen una inyección de dinero fresco para los mercados que ha encontrado un buen destino en España), junto con la caída del precio del petróleo (que es un ahorro directo para empresas y familias) y el euro barato (que impulsa las exportaciones y el turismo) están sin ninguna duda detrás de la recuperación española.

Gracias a su impulso, el consumo interno ha despertado este año y el sector inmobiliario ha puesto fin a su caída libre. Pero la situación financiera de España no deja de ser delicada, por lo que sigue siendo vulnerable a cualquier resfriado de la economía internacional, razón por la que ha de mirar con cautela el riesgo de que la crisis financiera se traslade ahora a Asia. Toda esta debilidad es consecuencia de que en nuestro país la suma de la deuda de hogares (733.239 millones de euros), empresas (932.600 millones de euros) y Estado (1,05 billones de euros) alcanza hoy los 2,6 billones de euros, una cifra que sobrepasa el PIB de países como Francia o Reino Unido.

Pese a la recuperación, que para el Estado se traduce en más ingresos, el año electoral ha aplazado el interés por reducir cuanto

antes la deuda pública. Los ingresos inesperados que está obteniendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la mejora de la coyuntura económica están siendo destinados a gasto público en busca de votos. Así, la deuda de las comunidades autónomas en el segundo trimestre del año en curso (en el que se celebraron las autonómicas y municipales) creció de golpe en casi 10.000 millones de euros, según publicó *El Mundo* el 12 de septiembre (p. 28). Siguiendo los pasos de las autonomías, el Gobierno central también ha apostado por aumentar el gasto en los últimos meses del año, antes de las elecciones generales, acelerando medidas como la reducción del IRPF, la devolución de pagas a los funcionarios o la bajada del precio de la luz (al rebajar los llamados costes regulados, que dependen del Ministerio de Industria).

En cualquier caso, aunque el descontrol del déficit fue el detonante del ataque especulativo sufrido por España en 2012, ello no parece preocupar ahora a los mercados financieros internacionales. No hay nada que indique que el susto que dio la deuda hace tres años vaya a repetirse en el corto plazo. Esto se debe, más que a las medidas adoptadas por el Gobierno, al respaldo del BCE. Y es que como recuerda el analista financiero, Juan Ignacio Crespo, ningún país podría hacer frente a su deuda si ésta fuera reclamada de golpe; en palabras suyas: «La deuda pública en la mayor parte de los países no se paga: se renueva, y sólo da problemas de verdad cuando hay una ola de pánico y desconfianza que lo impide».

Sin embargo, esta premisa sólo funciona cuando el país deudor tiene bien protegidas sus murallas con la guardia de un banco central, cuyo arsenal monetario puede ser inagotable. La existencia de esa defensa, que fue puesta en cuestión en 2012, es hoy un hecho asumido por quienes quisieron apostar por la caída del euro ante la tardía

respuesta a la crisis por parte del BCE. Y gracias a ella, el Tesoro Público español está renovando con comodidad la deuda que le vencía este año, más de 177.000 millones de euros.

2. Los acreedores de un país sobreendeudado

La digestión del empacho de crédito no sólo está siendo dolorosa para las familias y empresas españolas. También ha puesto contra las cuerdas a sus acreedores. De hecho, fueron ellos, los bancos, los protagonistas del episodio más dramático de la crisis de deuda española. En junio de 2012 el Gobierno español se vio forzado a solicitar un rescate financiero de hasta 100.000 millones de euros para sanear a una parte de su sector bancario: las cajas de ahorro. La escasa o nula profesionalización de los consejos de administración de estas entidades, junto con las decisiones políticas que se tomaron para tratar de salvarlas, hizo que muchas sucumbieran al cóctel explosivo de la crisis financiera mezclada con el estallido de la *burbuja* inmobiliaria.

En septiembre de 2008, mientras el sistema financiero estadounidense se desmoronaba, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sacó pecho ante los medios internacionales al presumir de que la banca española era quizás la «más sólida» del planeta. España minusvaloró así la magnitud de la crisis que estaba por venir y fue el país europeo que más tardó en reaccionar en un momento en el que buena parte de los gobiernos occidentales estaban inyectando ayudas a sus bancos.

Pero, sin entrar a analizar los motivos y consecuencias del rescate financiero, lo cierto es que la fuerte dependencia del crédito bancario ha jugado en contra de empresas y Administraciones Públicas en los últimos

años. La deuda familiar y empresarial con la banca española seguía siendo en 2014 de 1.375.000 millones de euros a pesar del fuerte desapalancamiento que iniciaron en 2007. Con ese volumen de deuda y ante la delicada situación de sus balances, los bancos se vieron obligados a cerrar el grifo del crédito justo cuando los españoles más lo necesitaban.

Un tratamiento bien distinto ha recibido el Estado. Aunque ha pasado apuros, la Administración Pública sí ha estado respaldada en estos años por la banca nacional gracias, entre otros, a la liquidez de apoyo que los bancos españoles recibieron desde el BCE para evitar que las subastas del Tesoro Público quedaran desiertas en los peores momentos de la crisis. Sin embargo, el alto volumen que ha alcanzado nuestra deuda pública nos ha hecho también dependientes de los acreedores internacionales. España le debe a fondos de pensiones, grandes aseguradoras, *hedge funds*, bancos internacionales e instituciones europeas (como el BCE o el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera) 1,65 billones de euros, según Afi. Una cifra que demuestra que nuestro país sigue siendo vulnerable en caso de que la crisis financiera que arrancó en EEUU y se trasladó a Europa en 2010 llegue ahora a Asia, como anticiparon las Bolsas el pasado verano.

3. Un país más desigual

Como no podía ser de otro modo, la crisis ha hecho mella en la riqueza de los españoles y ha forzado un cambio de mentalidad sobre cómo se debe gestionar el ahorro. En la calle, la ciudadanía dice sentirse hoy más pobre que hace ocho años. Las estadísticas también reflejan que la tasa de ahorro de los hogares ha caído en los últimos años, algo que se explica por la menor renta disponible de los



Pavimentación de una calle en Celanova (Orense) con fondos provenientes del controvertido «Plan E» de 2009 (Darío Álvarez, Wikipedia)

individuos. Sin embargo, las cifras globales sobre riqueza arrojan datos sorprendentes y alejados de esa realidad. Según el Banco de España, el ahorro financiero (depósitos, fondos de inversión o acciones) de los hogares españoles alcanzó a finales de marzo de 2015 los dos billones de euros, la cifra más alta de la historia. En un país en el que la tasa de ahorro ha caído, este hito no habría sido posible de no ser por el efecto que ha tenido en la riqueza neta la reducción de los pasivos (obligaciones de pago) de las familias. En estos años, los hogares no sólo han ido amortizando los créditos hipotecarios de la época del *boom* sino que han dejado de pedir nuevos préstamos.

También ha ayudado a construir ese dato la recuperación de la Bolsa. Desde que

tocó sus mínimos en 2012, el Ibex 35 ha retomado el vuelo. La subida del mercado bursátil en los últimos tres años, junto con el mal momento que ha vivido el sector inmobiliario y la poca rentabilidad que ofrecen hoy los depósitos, ha animado a muchos particulares a invertir en Bolsa. De hecho, más de una cuarta parte (26,2%) de las acciones de empresas cotizadas está hoy en manos de ahorradores particulares. Esto supone el mayor porcentaje de participación de los hogares en la Bolsa de los últimos 12 años, según datos de BME, el operador de la Bolsa española.

No obstante, además de por el patrimonio financiero (acciones en Bolsa, depósitos, fondos de inversión, etcétera) la riqueza de los hogares también se mide por sus pro-

piedades inmobiliarias. Y más en un país como España, en el que invertir en *ladrillo* siempre ha sido la opción favorita de los ahorradores. Por ello, el declive del *Real Estate* también explica en buena medida que los ciudadanos se sientan hoy menos ricos que hace ocho años.

Entre 2007 y 2014, el precio de la vivienda en España experimentó una caída del 40%, porcentaje que en algunas zonas se eleva hasta el 60%. Este desplome ha sido especialmente cruento para quienes han estado pagando con dificultades una hipoteca en estos años a sabiendas de que el importe debido difícilmente se recuperaría con una venta del piso. Y ha obligado a los inversores particulares a buscar nuevas fórmulas para hacer crecer su ahorro. Los datos de un estudio de Inverco (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva) son elocuentes. En 2006, el peso inmobiliario del patrimonio de los españoles representaba el 590% del PIB y era seis veces superior al financiero. A finales de 2014, ese porcentaje se había reducido al 402% del PIB y ya tan sólo era cuatro veces mayor que el financiero.

Acabar con el mito de que invertir en vivienda siempre sería rentable no es la única lección que han tenido que aprender los ahorradores de este país en la última década. Los españoles también se han visto obligados a abandonar los depósitos, el otro gran destino tradicional del ahorro de los hogares. En este caso, la causa de fuerza mayor ha sido la caída de los tipos de interés a mínimos históricos, una decisión que tomó el BCE con el objetivo de estimular la economía. Esta situación ha favorecido enormemente a la industria de los fondos de inversión, que sólo en 2014 logró captar en España 30.000 millones de euros procedentes del ahorro de los hogares.

Sin embargo, pese a que el dinero atraído por los fondos salió de los depósitos,

los españoles siguen conservando 733.981 millones de euros en este instrumento financiero, lo que supone un 29% más que en 2007. De nuevo, la bonanza de las cifras contrasta con el sentimiento de la calle. ¿A qué se debe esta fractura entre los números y la percepción social? «Los datos que ofrece el Banco de España son agregados. No recogen el reparto de la riqueza», explica el director del servicio de estudios de BME, Domingo García Coto.

La brecha social es uno de los daños de esta crisis que más años tardará en repararse. España es hoy un país mucho más desigual que antes de la quiebra de Lehman Brothers. La riqueza está mucho menos repartida que hace una década. Los ricos hoy son más ricos y los pobres, más pobres. De hecho, en estos años en los que la crisis se ha cebado con el empleo y el paro ha desbordado todas las previsiones al llegar a superar los seis millones de desempleados, el número de ricos en España no ha hecho más que crecer. Según un estudio de Capgemini y Royal Bank of Canada (RBC) Wealth Management, desde 2008 el número de grandes patrimonios ha crecido un 40% en nuestro país. De este modo, hoy viven en España 178.000 personas contabilizadas con un patrimonio igual o superior a un millón de dólares (sin contar el valor de la primera vivienda, coleccionables, consumibles y los bienes de consumo duraderos).

Pero mientras la ingeniería financiera ha permitido a los más ricos elevar su patrimonio en esta crisis, la recesión ha dejado un balance desolador para otros ciudadanos. No hay que olvidar que más de la mitad de los parados ya no recibe ningún tipo de prestación. Tampoco el hecho de que la devaluación salarial por la que se ha apostado para aumentar la productividad ha mermado el poder adquisitivo de unos trabajadores cuyo sueldo más frecuente es

de 15.500 euros anuales, según la encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE).

del mundo, pero su sector financiero está ahora más preparado que en 2008 para afrontar una crisis.



4. Conclusión

Gracias al esfuerzo de sus ciudadanos y a la resistencia de sus empresas, España empieza a recuperarse del batacazo que se pegó en 2007 y vuelve a crecer con vigor (como se ha apuntado, lo hará por encima del 3% este año si se cumplen las previsiones). Nuestro país ya no aspira a entrar en el G8, pero es hoy más competitivo que hace ocho años, según reconoce el Foro Económico Mundial. Tampoco presume como antaño de tener la banca más sólida

Después de una larga travesía por el desierto de la recesión, España ha encontrado agua y empieza a vislumbrar un futuro esperanzador. Pero afronta ese porvenir con la misma dolencia con la que entró en la crisis: un endeudamiento desorbitado. De poco ha servido el sacrificio del sector privado para reducir sus deudas. El desfase de las cuentas públicas de los últimos años ha hipotecado el futuro de los españoles, que deben por cabeza en bonos y letras del Estado 22.663 euros.

